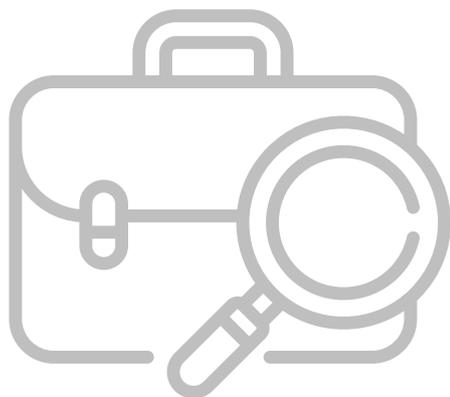




IFE y la transición del desempleo al trabajo

Por: *Marcela Perticará, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, EE.UU. Directora Departamento de Economía, FEN-UAH y Pablo González, Ph.D. en Economía, University of Texas A&M, EE.UU. Director de Postgrados, FEN-UAH.*



Si observamos los datos publicados por el INE, la pandemia significó la destrucción de aproximadamente un millón de empleos a lo largo del 2020, situación que no cambió sustancialmente durante el primer semestre del presente año.

Estos datos son consistentes con los resultados que arroja el Estudio Longitudinal Empleo-Covid19 de la Universidad Católica, que muestra que si bien a julio del 2020 se había perdido casi 2.4 millones de empleos, a julio del año 2021, se recuperaron 1.4 millones. Casi la mitad de esos puestos perdidos afectaron a las mujeres, para las que la tasa de participación cayó diez puntos con respecto a la que prevalecía prepandemia.

En ese contexto, el gobierno implementó distintas medidas de mitigación ante la crisis de ingresos que, tanto los trabajadores como las empresas, enfrentaron. Entre esas políticas, y después de varias versiones y correcciones, hoy contamos con un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llega a cubrir a aproximadamente el 80% de la población, se sancionó la Ley de Protección del Empleo (LPE, que permite suspender contratos y reducir jornadas, sin extinguir la relación laboral y da acceso a beneficios de desempleo), se crearon nuevos subsidios de empleo (Línea Regresa, Contrata, Nuevo Empleo y Protege), a la par que se dirigen ayudas específicas a micro y pequeñas empresas (Bono Mype 2021, FOGAPE y otras medidas tributarias).

Esta semana, el Presidente de la República anunció la extensión del IFE hasta diciembre, una medida un poco forzada desde lo político (ante la amenaza de un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones). Contraria también a las recomendaciones realizadas por la Comisión para la Recuperación de Empleos, que proponía reducir este beneficio y focalizarlo en los segmentos más golpeados de la población (aquellos imposibilitados de trabajar). Sí acogió la propuesta de dicha Comisión de implementar un subsidio al empleo, el IFE laboral, aunque con topes un poco menos generosos a los sugeridos por la instancia. Este nuevo beneficio, transitoriamente cubriría nuevas relaciones

Ante la mejora en las condiciones sanitarias y la reactivación del mercado laboral, un esquema basado en el apoyo a la generación del empleo y fomento a la participación laboral parece ir en la línea adecuada. Uno puede estar tentado a pensar que la lenta recuperación en la participación laboral puede haber estado influenciada, al menos en parte, por la existencia del IFE. En la literatura económica hay casos en los que, por ejemplo, la implementación de seguros de desempleos o cesantía han generado la elevación de la tasa de desempleo de largo plazo. El IFE no es un seguro de desempleo ni es una política permanente. Sin embargo, la disponibilidad de ese ingreso puede estar ocasionando que

periodo adicional, incluso una vez terminado el beneficio. Es más, hay evidencia de que esquemas de seguro de desempleo generosos pueden ayudar a los trabajadores a encontrar mejores trabajos¹. Si el IFE laboral fomenta la creación de relaciones laborales transitorias (sólo por la duración del beneficio), el fisco estaría gastando recursos en una política que no está generando empleo de largo plazo.

Pero ciertamente muchos otros factores pueden estar también por detrás de la lenta recuperación de la participación laboral y la aparente escasez de mano de obra en algunos sectores de la economía²: miedo a enfermarse gravemente o a contagiar a un familiar con factores de riesgo, limitaciones horarias, cuidados en el hogar de terceros dependientes, aglomeraciones en medios de transporte, reticencia a trabajar en actividades con alta circulación de personas. Y por detrás, un enorme problema de coordinación al haber una apertura gradual de las distintas actividades que involucran a una persona en su vida diaria. En particular si los colegios o jardines infantiles no funcionan con la frecuencia y horarios normales, muchos padres y madres no pueden retornar a sus trabajos de manera presencial.

El dilema es cómo generar incentivos para volver al trabajo, sin desproteger en el entretanto a segmentos de la población que pueden aún estar enfrentando las dificultades y restricciones antes mencionadas para volver al trabajo o porque el sector o actividad en la que trabajaban prepandemia aún no están en condiciones de funcionar con normalidad. Surge como esencial proteger y fomentar la creación de empleo en el corto plazo, sin perder de vista que aún hay una alta incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la recuperación del nivel de actividad en algunos sectores.



laborales generadas hasta diciembre del 2021, por un período de 4 meses. Es compatible con otros beneficios, como los subsidios Contrata, Protege, la reducción temporal de la jornada de trabajo (LPE), el IFE, el Ingreso Mínimo Garantizado y otros subsidios ya de más larga data como son Bono Trabajo Mujer (BTM) y Subsidio Empleo Joven (SEJ).

las personas piensen mejor a qué puesto de trabajo postular, qué nuevo empleo buscar y cuándo insertarse, cuál es el nivel de flexibilidad que desea ahora. Esta podría ser una explicación de por qué vemos algunos puestos vacíos que no se llenan. El IFE aliviana el costo de “vitriñar” en el mercado laboral. Este efecto podría perdurar algún

(1) Ver Farooq, A, Kugler, A y U. Muratori (2020). “Do Unemployment Insurance Benefits Improve Match Quality? Evidence from Recent U.S. Recessions,” NBER Working Paper No. 27574 (Julio).

(2) Un reporte de Morgan Stanley escrito por los economistas Sarah Wolfe y Ellen Zentner concluye que no hay evidencia de que los beneficios gubernamentales son los causantes de la escasez de mano de obra. <https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/07/08/states-that-ended-300-unemployment-benefits-havent-boasted-labor-market-yet-morgan-stanley-finds/?sh=492e52722237>



El dilema es cómo generar incentivos para volver al trabajo, sin desproteger en el entretanto a segmentos de la población que pueden aún estar enfrentando dificultades y restricciones para volver al trabajo o porque el sector o actividad en la que lo hacían aún no están en condiciones de funcionar con normalidad



Es importante también considerar que el Covid ha generado cambios importantes en la estructura de la economía. Algunas industrias han visto reducido su nivel de actividad, otras han crecido y/o modificado fuertemente sus formas de producir. Se han automatizado procesos y se han abierto espacios para teletrabajo antes inexistentes, lo que ha hecho que algunas competencias laborales hayan quedado obsoletas, además de abrir la posibilidad de jornadas laborales

parciales y/o flexibles que ahora los trabajadores pueden estar considerando como más adecuadas. El IFE laboral puede ser un motor para activar la creación de empleo, pero hay que pensar en medidas y políticas que aumenten la productividad y favorezcan el crecimiento en el largo plazo.

En este contexto, también es clave que prime la coordinación de los distintos instrumentos de promoción del empleo, con

las políticas sanitarias y de contención de la pandemia. No puede esperarse una reactivación plena del mercado laboral, sin jardines infantiles y colegios con pleno funcionamiento, con horario normal. En el caso particular de los subsidios actualmente vigentes, el Subsidio Protege (que entrega recursos para cuidado infantil a mujeres con niños entre 0 y 2 años por hasta 6 meses) será de poca efectividad para generar (o mantener) empleo de largo plazo, a menos que la entrega de este subsidio se coordine con el sistema de cuidado infantil público y se le garantice a esta mujer un cupo preferencia en alguna sala cuna pública. Si el IFE laboral fomenta la creación de relaciones laborales transitorias (sólo por la duración del beneficio), el fisco estaría gastando recursos en una política que no está generando tampoco empleo de largo plazo.

Sólo la suma de ambos IFEs, sin incluir el gasto en el resto de los subsidios, involucra unos US\$7 mil millones, importe para nada desdeñable. El esfuerzo fiscal que está realizando el Estado chileno en estos dos años es impresionante y está en línea con lo que otras economías han realizado.

La disponibilidad de ahorros previos permite en cierta forma algún margen de acción relativamente más amplio comparado al contexto internacional. Pero la situación fiscal no es sostenible en el largo plazo, a menos que entraran a las arcas fiscales recursos frescos (por mayor crecimiento o por reforma del sistema impositivo) para solventar este mayor gasto. Las cifras de reactivación que estamos viendo en estos meses, es meramente recuperación de los niveles de actividad económica prepandemia, producto del desconfinamiento. Un alto déficit fiscal tarde o temprano, repercutirá en tasas de interés y precios, lo que a su vez podría comprometer el crecimiento de la economía en el futuro. **OE**